

SANTERÍA Y PORNOGRAFÍA MEDIÁTICA

El día 26 de Abril de 2004, el Pleno del Ayuntamiento de Agüimes, a propuesta del colectivo Roque Aguayro, debatió y aprobó por unanimidad una moción dirigida a la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias demandando su urgente intervención ante la proliferación en las televisiones locales de Canarias de espacios pornográficos en horario infantil y de timadores profesionales de la superchería y superstición. El argumento fundamental de la moción era el considerar que estos programas constituyen una estafa al intentar obtener beneficio económico mediante el engaño y promesas falsas de solución a problemas planteados de buena fe por numerosos ciudadanos. Por otra parte, al no estar codificados y emitirse en horario inapropiado, es fácil el acceso de los niños a ellos, poniendo en peligro el proceso educativo infantil.

El día 25 de Octubre del mismo año, de nuevo a propuesta de Roque Aguayro y por unanimidad, se reitera el acuerdo plenario adoptado siete meses antes, recordándole a la Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias su inhibición ante este tema y la responsabilidad que tiene de actuar al ser depositaria de las competencias en materia de contenidos de la televisión local (Ley 25/1994, de 12 de Julio). Igualmente se acuerda que la transgresión flagrante de los derechos de salud pública y la educación hacía necesario el que se tomaran medidas judiciales y que, por lo tanto, el Ayuntamiento debía acudir, como así lo hizo, a la Fiscalía dado que se incumplía el artículo 17 de la Ley 25/1994 de Protección de Menores frente a la programación de las televisiones, que obliga a no emitir programas ni escenas o mensajes de cualquier tipo que puedan perjudicar el desarrollo físico, mental o moral de los menores.

Meses más tarde la Consejería de la Presidencia contestó al Ayuntamiento, desmarcándose del asunto planteado, argumentando que no entraba dentro de sus competencias el control de este tipo de emisiones.

Ante la ausencia de respuesta por parte de la Fiscalía, el día 19 de Julio de 2005, nueve meses más tarde, como Alcalde de Agüimes me dirijo al Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias demandándole una intervención urgente ante lo que a todas luces se podría considerar un delito de estafa, pues sangra económicamente a los ciudadanos explotando sus debilidades y su fragilidad emocional, e instándole a una investigación y, en su caso, a la prohibición de tales programas.

Siete meses después, casi dos años desde la primera denuncia, nadie ha movido un dedo para solucionar este problema.

Todas las administraciones estamos obligadas a responder y a cumplir los plazos establecidos, además de a la colaboración interadministrativa necesaria en un Estado de Derecho, pues bien, esto no parece que tenga que ver con la Fiscalía. Desde el Ministerio Fiscal se ha obviado una contestación al Ayuntamiento de Agüimes, pasando ampliamente del problema planteado.

Por otra parte, la Consejería de la Presidencia, en una actitud absolutamente clientelar, miró para otro lado cobarde e irresponsablemente, en vez de posicionarse en la defensa de los más desprotegidos.

Mientras, los aprendices de brujos y los pornógrafos diurnos y, por tanto, infantiles, siguen campando a sus anchas. Así una televisión local de mucha audiencia tiene vendida, por un precio altísimo, una hora diaria de su programación a una especie de “multinacional” canaria de la estafa esotérica, que cuenta con sucursales en distintas islas y que engaña, se mofa, y da consejos médicos o psicológicos absolutamente imprudentes y temerarios.

Así, una televisión reivindicativa, muy preocupada en denunciar por distintos medios, farolas rotas, jardines sucios y otras trapisondas de mala gestión política, se nutre de estos estafadores para poder llegar a fin de mes. Por lo visto es menos grave el daño psicológico y moral que se puede hacer a las personas más frágiles de nuestra sociedad.

Así, otra de estas televisiones locales, soportes muchas veces de otras actividades empresariales, en horas del mediodía y primera hora de la tarde, entre las cuatro y las seis, en horario puramente infantil, con muchos padres fuera de casa, mantiene abierta una línea pornográfica escrita, receptora de mensajes que luego reproduce una voz metálica, como si los niños que a esa hora ven los programas no pudieran leer bien y necesitaran una lectura en voz alta para enterarse mejor de los que allí se dice. Por supuesto, cualquier menor puede responder a esos mensajes.

Y ante todo esto el Gobierno de Canarias impasible. El Ministerio Fiscal impasible. El Diputado del Común por los cerros de Úbeda con las portadas de las revistas en los quioscos.

Mientras, la defensa del ciudadano desprotegido y la protección del menor al garete. Mientras, las instituciones sin competencias en la materia y los ciudadanos de bien viendo ante nuestras narices, impotentes, la estafa y el maltrato infantil sin ningún tipo de control.

¿ Tiene que ser acaso un Ayuntamiento el responsable de denunciar estos casos?.

¿ Y los jueces, y los fiscales y el Gobierno de Canarias.?

EL ALCALDE DE AGUIMES
ANTONIO MORALES MENDEZ